

La ciencia española ante los recortes

RESUMEN: El sistema público de I+D afronta importantes recortes presupuestarios en 2013 que se suman a los de 2012 y 2011. Recortes que están muy por encima de la media, que van a afectar gravemente a toda la I+D y que parecen tener una escasa repercusión en la opinión pública. Sin I+D, nuestras empresas seguirán siendo insuficientemente competitivas y nos condenamos a ser sólo un país de servicios de bajo valor añadido y turismo, incapaz de crear empleo cualificado y estable, fuera de ciclos de fuerte crecimiento, entre otros efectos negativos. Pero, lamentablemente, no basta con invertir, además, es necesario: educar en la importancia de la ciencia, revisar los procesos de asignación de recursos para que sean más eficientes, un nuevo marco para las *spin offs* y procedimientos para que las actuaciones públicas en la ciencia puedan ser revisadas o auditadas.

PALABRAS CLAVE: I+D, país de servicios, ciencia y tecnología, actuaciones públicas.

Spanish Science and cutbacks

ABSTRACT: The public R&D Spanish system is facing significant budget cuts in 2013 that summed up to those of 2012 and 2011. These cuts, which are well above average cuts, will seriously affect the whole R&D system while they seem to have little impact on public opinion. Without sufficient R&D investments, Spanish companies will remain insufficiently competitive and we condemn ourselves to be just a country of low value-added services and tourism, unable to create skilled and stable jobs, among other negative effects. But, unfortunately, it is not enough to invest in R&D, it is also necessary: to educate on the importance of science, to review the resource allocation processes to make them more efficient, a new framework for spin-offs and procedures so that public investments and decisions can be reviewed or audited.

KEYWORDS: R&D, service country, science and technology, public acts.

En esta crisis que tanto nos ocupa vemos con preocupación el profundo efecto que están teniendo, y tendrán en el futuro, los recortes en el capítulo de la ciencia y el hecho de que estén pasando de una manera bastante imperceptible para la mayor parte de la sociedad. A primera vista, este segundo hecho podría interpretarse como indiferencia por

parte de la sociedad española hacia este problema, que hundiría sus raíces en el hecho sociocultural de que el español medio no acaba de creerse la importancia de la ciencia para el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la competitividad industrial. Aunque quizás la realidad sea algo más compleja y a una cierta despreocupación de nuestra sociedad con respecto a la ciencia haya que sumar el hecho de que los efectos de los recortes en ciencia no son directamente observables por el español medio. En primer lugar, porque científicos y tecnólogos podrían ponerse en huelga, pero nadie lo notaría, no sería como una huelga en el transporte, la educación o la sanidad. En segundo lugar, porque no pocos medios de comunicación han dado por bueno el mensaje del gobierno que dice que no recorta en ciencia.

Quizás, llegados a este punto, haya que volver al inicio de nuestra argumentación y encontrar una explicación a todo esto en el hecho sociocultural de que en realidad no nos creemos la importancia de invertir en ciencia. Así, de este desinterés por la ciencia participamos todos como sociedad, también el gobierno, los políticos y los medios de comunicación además del español medio. Quizá porque ya teníamos muchos problemas, o quizá porque a éste, efectivamente, no le damos importancia o lo consideramos menos urgente. En este sentido se manifestaba, recientemente (17 de julio de 2012), Juan Mulet, director general de la fundación COTEC, durante la presentación de «El Informe COTEC 2012: España es el único país que ha bajado la inversión en innovación con la crisis... En España aún no nos creemos que el I+D es importante, y lo dejamos caer».

En nuestra opinión, el análisis de la realidad de la inversión en I+D en España se asienta sobre tres afirmaciones: 1) los presupuestos del estado sí recortan en ciencia, y en un porcentaje mayor que el correspondiente al recorte medio; 2) estos recortes y el total acumulado durante los últimos años están poniendo al límite el día a día de los centros de investigación, y 3) estos recortes están comprometiendo muy seriamente la viabilidad futura de la I+D en España.

¿Se recorta en I+D por encima de la media?

Tomemos como valor de referencia el recorte medio para 2013 según Hacienda: el 8,9%. La versión del gobierno sobre la ciencia en los últimos presupuestos va desde que el presupuesto se mantiene hasta

que aumenta. Ciertamente, el Ministerio de Economía y Competitividad (ministerio en el que se ubica la Secretaría de Estado de Investigación) es uno de los pocos que aumentan su presupuesto para 2013 (un 4%), aumento debido, según han dicho algunos medios, a que la inversión en I+D aumentaba. Esto no es cierto, el montante global del presupuesto para I+D+i en 2013 es de unos 5.562,78 millones de euros, la misma dotación que en el año 2012. Pero aunque el total se mantenga, los fondos destinados a subvenciones, transferencias y gastos, los que más afectan a la ciencia pública, vuelven a caer y pasan de 2.472 millones de euros a 2.121 (una reducción del 14%). Lo que sí ha subido ha sido la parte dedicada a préstamos de 3.171 millones a 3.441, es decir un 8,5%.

Para valorar este dato podemos recurrir a la opinión de la propia Secretaria de Estado de Investigación (Carmen Vela) cuando juzgaba los recortes del año anterior (2012): En aquella ocasión los recortes se centraron en los préstamos. Según Carmen Vela (rueda de prensa del 4 de abril de 2012, recogida por la agencia SINC), en el año 2011, de los 3.218 millones de euros disponibles para estas operaciones financieras «sólo se ejecutaron 1.362», el 42,3%; mientras que un año antes, fue un 50% de lo presupuestado. Así, «si perdemos 916 millones de euros en una partida en la que dejamos de gastar el año pasado 1.900 millones nos hace menos daño que si perdemos más en capítulo 7, que es el que más afecta a plan nacional, convocatorias de empresas y convocatorias de recursos humanos». Dicho de otra forma, este año se ha subido el presupuesto de una partida que, según la propia Secretaria de Estado, saben que no se va a gastar y se han efectuado los recortes en la que «más afecta». Por otro lado el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), responsable en gran medida de la gestión de esta partida, pasa por momentos difíciles. En 2012 sufrió una merma del 78,7% en su presupuesto financiero, pasando de 536 a 114 millones de euros. Así pues, es muy dudoso que este aumento de la partida de préstamos tenga una ejecución suficiente que suponga un aumento real de la inversión pese a que para 2013 el presupuesto del CDTI se ha incrementado desde los 114 millones de euros de 2012 hasta los 622 millones de euros.

Así, y por citar un ejemplo, en los presupuestos de 2013, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación en España, acumula los mayores recortes tanto en volumen absoluto como en cifras relativas: un 9,9%, pasando de 668 a 602 millones de euros. Y peor aún es la situación si la

observamos en el contexto de los últimos cuatro años. En los presupuestos de 2012 la inversión en I+D+i sufrió un recorte del 25% frente al 17% de otras partidas. En 2011 el gasto era un 8% que en 2010, que era, a su vez, un 15% inferior que el de 2009. Así, por citar otra vez el ejemplo del CSIC, el presupuesto en 2009 fue de unos 850 millones de euros frente a los citados 602 millones de euros de 2013. El recorte global acumulado en I+D entre 2009 y 2012 es del 35,5%.

¿Está el sistema al borde del límite?

Por si los grandes números no nos llevan a esta conclusión, citemos algunos ejemplos de lo que está pasando en el día a día de algunos de los organismos públicos de investigación. El pasado 19 julio el CSIC paralizaba de forma temporal todos los pagos a proveedores para poder hacer frente a las nóminas de sus trabajadores. Este hecho tuvo una amplia repercusión en la prensa, pero pese a lo que la misma prensa anunció unos días después, la situación no se resolvió hasta finales de septiembre, por lo que durante este tiempo todas las compras y gastos asociados a la actividad investigadora y a la ejecución de proyectos han estado paralizados. Más aún, durante dos semanas de agosto, el CSIC determinó, con el objetivo de reducir gastos, el cierre o restricción horaria de muchos de sus centros, algo que no había pasado desde la llegada de la democracia. En las últimas semanas de octubre, está circulando con insistencia la posibilidad de un ERE, al menos, en el CSIC alentado por la norma, recientemente publicada (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, BOE de 30 de octubre de 2012), que regula los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de jornada. Esta norma establece que existen causas económicas para la aplicación de un ERE en el sector público cuando exista insuficiencia presupuestaria, la cual se entiende como aquella en la que concurren las siguientes circunstancias: a) que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el Departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario, y b) que los créditos del Departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. De los cerca de 14.500 trabajadores en plantilla del CSIC, solo 6.500 son fijos.

¿Se compromete la viabilidad futura?

Es difícil conocer qué pasará en el futuro, pero cabe suponer que recortes tan acusados y durante tantos años tendrán un profundo efecto irreversible en el sistema de I+D español y que no será un simple bache de un par de años. Quizá en este punto haya que volver la vista hacia los recursos humanos, la base del sistema y el capital más importante.

Este año no se hará ningún nuevo contrato Ramón y Cajal, el programa estrella de incorporación de científicos puesto en marcha hace más de una década para recuperar y atraer científicos al sistema de I+D español y vía, contractual, de entrada al sistema de I+D. La última convocatoria corresponde a diciembre de 2010, fueron seleccionados 250 candidatos en julio de 2011. Este año la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación aún no ha hecho la convocatoria de 2012, que en estos momentos se prevé para el próximo verano. Por tanto, 2012 se queda en blanco. También están pendientes de convocatoria los contratos Juan de la Cierva (estos para jóvenes doctores, sin la destacada y acredita experiencia de los *cajales*) y la lista de los que los obtengan se conocerá igualmente en 2013, saltándose la correspondiente contratación de 2012. Recientemente se ha sabido que se suprimirán las ayudas postdoctorales del Ministerio de Educación para que los jóvenes doctores realicen estancias en el extranjero, y que el CSIC, suspende los programas JAE de Recursos Humanos.

El proceso de formación del personal científico es largo y complejo. Tras los estudios universitarios (4-5 años) viene la realización de una tesis doctoral (4-5 años) y luego un periplo postdoctoral de entre 2 y 10 años. Así, cuando el investigador consigue por fin estar en situación de acceder a un puesto estable pueden haber transcurrido entre 10 y 20 años y se encuentra en un momento delicado, también, de consolidación personal y familiar. Según cifras de 2009 del informe de seguimiento del programa de contratación de doctores «Ramón y Cajal»: «La edad media de consecución del contrato es de 38 años, y después de 5 años de contrato el investigador cuenta como media con 43 años. Con esta edad aún no posee un puesto de trabajo estable...». La interrupción durante dos o incluso tres años de las vías de acceso a un puesto estable puede suponer la pérdida efectiva de unos valiosos recursos humanos en los que hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo y que volveremos a tardar muchos años en volver a formar.

Además, supone un fuerte desincentivo para las nuevas generaciones que ven que a lo largo y complicado de la carrera investigadora se une una excesiva inseguridad. También supone un envejecimiento de nuestra plantilla de investigadores, que si bien gana en experiencia, pierde en dinamismo y nuevas ideas. En este momento, la edad media del personal de los OPIs (organismos públicos de investigación) ronda los 50-55 años (58 para el CSIC) y cabe pensar que seguirá aumentando.

La situación es grave, es como la de un cáncer que no da la cara: para cuando notemos los efectos puede ser demasiado tarde. Sin I+D, seguiremos siendo importadores netos de tecnología, nuestras empresas seguirán siendo insuficientemente competitivas en un mundo globalizado y el saldo por royalties de la balanza de pagos (informática, medios de transporte, medios de comunicación, salud, etc.) seguirá mermando renta a la economía española y perderemos posiciones como exportadores frente a países que invierten fuertemente en I+D (China, Brasil, etc.). Reduciendo la inversión en I+D, nos condenamos a ser sólo un país de servicios de bajo valor añadido y turismo, incapaz de crear empleo cualificado y estable, fuera de ciclos de fuerte crecimiento impulsados por la economía de nuestros vecinos. Sin suficiente inversión en I+D, la industria y los servicios avanzados no podrán asumir el papel dinamizador del empleo que necesita la economía española para ir reduciendo la abismal tasa de paro del 25%. Pero, lamentablemente, no basta con invertir en I+D, es necesario educar a las nuevas generaciones en la importancia de la ciencia, es necesario revisar los procesos de asignación de recursos, para que efectivamente sean justos, transparentes y basados en los méritos, es necesario olvidar las inversiones faraónicas en ciencia que sólo dejan monstruos imposibles de mantener o proyectos inacabados, verdaderos sumideros de recursos, es necesario otro marco para la creación de empresas basadas en resultados de la investigación (*spin offs*) y es imprescindible que las actuaciones públicas en la ciencia sean revisadas o auditadas y sus gestores puedan ser responsables de las arbitrariedades y despilfarros que se comentan. ■